

DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

LEY 11/2017, de 4 de julio, de reparación jurídica de las víctimas del franquismo.

El presidente de la Generalidad de Cataluña

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 65 del Estatuto de autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente

LEY

Preámbulo

Desde el mismo inicio del golpe de estado militar de signo fascista que se produjo contra la Segunda República Española, y que fue el origen de la larga y cruenta Guerra Civil de 1936-1939, las autoridades franquistas desarrollaron una multiplicidad de formas y mecanismos de represión de todas aquellas personas que, por razón de su afiliación política, sindical o asociativa, por sus ideas o creencias, o por sus opciones vitales, consideraban enemigas del régimen autoritario que estaban en proceso de edificar.

La dimensión y la intensidad de estas políticas represivas dan fe de la aberrante intención de aniquilar y erradicar toda forma de pensamiento antagonista o disidente de la ideología sobre la cual el franquismo construyó el conjunto de sus instituciones.

Cabe recordar que el Estatuto de Cataluña de 1932 fue derogado por la Ley de 5 de abril de 1938, un acto ilegal de la dictadura franquista que solo pudo ser impuesto por la fuerza de las armas. Por ello se constituyeron los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, posteriormente denominada Auditoría de la IV Región Militar, y se llevaron a cabo los procesos aplicados por el procedimiento de los consejos de guerra como medio de represión política vulnerando las competencias y la legalidad entonces vigente, también respecto a los delitos tipificados, los procedimientos seguidos y las garantías procesales que eran exigibles.

En atención a las víctimas y sus familiares, es preciso que una norma con rango de ley constate y declare definitivamente la nulidad de todos estos procedimientos, que pueden calificarse de farsa, y de las sanciones y condenas de graves consecuencias que de estos se derivaron.

Es preciso hacerlo, también, teniendo en cuenta los requerimientos formulados por los poderes públicos, tanto el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición del Consejo de Derechos Humanos en el último informe del período de sesiones de 22 de julio de 2014, que ha requerido a las instituciones del Estado «Identificar mecanismos idóneos para hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas en violación de los principios fundamentales de derecho y del debido proceso durante la Guerra Civil y el franquismo. Estudios comparados de otras experiencias de países que han enfrentado retos similares, incluyendo muchos en el contexto europeo, pueden resultar sumamente provechosos», en aplicación de la Declaración universal de los derechos humanos, el Pacto internacional de derechos civiles y políticos y el Convenio para la salvaguardia de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.

Los argumentos en el sentido de no reabrir viejas heridas del pasado son inconcebibles en un contexto democrático, ya que el restablecimiento de la dignidad de las víctimas no busca la venganza sino la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición.

Tras cuarenta y dos años de la muerte del dictador Franco ninguna ley ha declarado expresamente la nulidad de los juicios del franquismo.

Por este motivo, la presente ley, de conformidad con el ordenamiento jurídico, declara la ilegalidad de los

CVE-DOGC-B-17185096-2017

tribunales y de los procedimientos y consejos de guerra instruidos en Cataluña desde el 5 de abril de 1938 hasta diciembre de 1978 por la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, denominada posteriormente Auditoría de Guerra de la IV Región Militar.

A pesar de que, a medida que el conflicto fue avanzando y que fueron sucediéndose años de dictadura, las autoridades franquistas intentaron dotar a estos instrumentos de represión de una apariencia de legitimidad y de juridicidad, resulta imposible considerar que estos órganos tuviesen una auténtica naturaleza jurídica.

Para poder considerar que un grupo de personas está juzgando y conferir a aquello que decidan la consideración y el necesario efecto de «cosa juzgada», es necesario poder sustentar en derecho que el órgano en cuestión es realmente jurisdiccional, que se trata de un auténtico tribunal.

No puede considerarse órgano jurisdiccional aquel que no respeta las más mínimas garantías de imparcialidad, derecho de defensa y cosa juzgada de sus resoluciones, o que no goza de independencia del resto de poderes del Estado, como mínimo en el sentido de que exista una atribución genérica mínimamente racional del poder de juzgar a un órgano suficientemente individualizado.

De los consejos de guerra franquistas y de los órganos, jurados y tribunales a qué se hace referencia no se puede decir de ningún modo que fuesen órganos jurisdiccionales, que cumpliesen los mínimos requisitos para ejercer la función de declarar el derecho propia de un tribunal. El análisis de su naturaleza, composición y actuación nos obliga a verlos como lo que fueron, una farsa. Una actuación de hecho revestida apenas de la mera apariencia, más o menos sofisticada en función del momento histórico, de órganos jurisdiccionales.

Aquellos procesos políticos contrarios a la legalidad se mantuvieron más allá de la muerte del dictador en consejos de guerra por causas de carácter político con infracción de los derechos fundamentales de muchas personas, que fueron injustamente sometidas a ellos y, a consecuencia de los mismos, algunas de ellas, ejecutadas.

Así, constatada la nulidad de origen de los procedimientos y de las resoluciones, sentencias, condenas y sanciones que emanaron de aquellos procesos, como actuaciones de hecho y no jurisdiccionales que fueron, y declarada legalmente su ilegitimidad, no ha de suponer ningún problema que la ley constatare y declare su nulidad, y busque también establecer un mecanismo administrativo ágil para obtener certificación individualizada de esta circunstancia que la ley constata y declara.

Dado que los procesos y las resoluciones dictadas por los tribunales militares fueron públicos, para hacer efectivo su valor reparativo, la presente ley habilita al Archivo Nacional de Cataluña para la elaboración y publicación de una lista de procesos y sentencias.

Por todo ello, ha llegado el momento de asumir la responsabilidad histórica del Parlamento de Cataluña, ante las víctimas de aquellos procesos, y reparar los abusos cometidos por el régimen franquista contra la legalidad judicial y procedimental y efectuar la reparación exigida por las personas represaliadas, la sociedad catalana y las instancias internacionales.

Artículo único. Reparación jurídica de las víctimas del franquismo

De conformidad con el conjunto del ordenamiento jurídico, que incluye normas tanto de derecho internacional como de derecho interno, se declaran ilegales los tribunales de la Auditoría de Guerra del Ejército de Ocupación, denominada posteriormente Auditoría de la IV Región Militar, que actuaron en Cataluña a partir de abril de 1938 hasta diciembre de 1978, por ser contrarios a la ley y vulnerar las más elementales exigencias del derecho a un juicio justo. Y, en consecuencia, se deduce la nulidad de pleno derecho, originaria o sobrevinida, de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra, dictadas por causas políticas en Cataluña por el régimen franquista.

Disposiciones finales

Primera. Autorizaciones

1. Se autoriza al Archivo Nacional de Cataluña a elaborar y hacer pública una lista de los procesos instruidos y de las sentencias adoptadas de acuerdo con el Bando de 28 de julio de 1946, el Decreto de 31 de agosto de 1936, el Decreto número 55 de 1 de noviembre de 1936, la Ley de 2 de marzo de 1943, la Ley de 18 de abril de 1947, el Decreto 1794/1960, de 21 de septiembre, y el Decreto ley 10/1975, de 26 de agosto, en que

CVE-DOGC-B-17185096-2017

consten el número de procedimiento, la persona física o jurídica encausada y la condena impuesta. La lista ha de publicarse el mismo día en que entre en vigor la presente ley.

2. Se autoriza al Archivo Nacional de Cataluña a actualizar la lista, en caso de tener conocimiento, por cualquier causa, de la existencia de procesos no mencionados en el apartado 1 por no haberse conservado testimonio de los mismos en el archivo de los tribunales militares en Cataluña.

Segunda. Entrada en vigor

La presente ley entra en vigor al día siguiente de su publicación en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 4 de julio de 2017

Carles Puigdemont i Casamajó

Presidente de la Generalidad de Cataluña

(17.185.096)

DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA

LEI 11/2017, deth 4 de junhsèga, de reparacion juridica des victimes deth franquisme.

Eth president dera Generalitat de Catalonha

Sigue notòri a toti es ciutadans qu'eth Parlament de Catalonha a aprovat e jo, en nòm deth Rei e d'acòrd tamb çò qu'establís er article 65 der Estatut d'autonomia de Catalonha, promulgui era següenta

LEI

Preambul

Dempús deth madeish inici deth còp d'estat militar de signe fascista que se produxic contra era Dusau Republica Espanhòla, e que siguec era origina dera longa e sagnosa Guèrra Civila de 1936-1939, es autoritats franquistes despleguèren ua multiplicitat de formes e mecanismes de repression de totes aqueres persones que, per rason dera sua afiliacion politica, sindicau o associativa, pes sues idees o credences, o pes sues opcions vitaus, considerauen enemigues deth regim autoritari qu'èren en procès d'edificar.

Era dimension e era intensitat d'aguestes politiques repressives dan fe dera aberranta intencion d'anequelir e eradicar tota forma de pensament antagonista o dissident dera ideologia sus era quau eth franquisme bastic eth conjunt des sues institucions.

Cau rebrembar qu'er Estatut de Catalonha deth 1932 siguec derogat pera Lei deth 5 d'abriu de 1938, un acte illegau dera dictadura franquista que sonque podec èster imposat pera fòrça des armes. Per açò se constituïren es tribunaus dera Auditoria de Guèrra dera Armada d'Aucupacion, nomentada posteriorament Auditoria dera IV Region Militar, e s'amièren a tèrme es procèssi aplicadi peth procediment des conselhs de guèrra coma mejan de repression politica vulnerant es competències e era legalitat alavetz en vigor, tanben en çò que hè as delictes tipificadi, es procediments seguidi e es garantides processaus qu'èren exigibles.

En atencion as victimes e as sòns familiars, cau qu'ua norma damb reng de lei constate e declare definitivament era nullitat de toti aguesti procediments, que se pòden qualificar de farsa, e des sancions e condemnes de grèus conseqüències que se'n derivèren.

Cau hè'c, tanben, tient en compde es requeriments formuladi pes poders publics, autant eth Comitè de Drets Umans des Nacions Junhudes, coma eth Relator Especial sus era promocion dera vertat, era justícia, era reparacion e es garantides de non repeticion deth Conselh de Drets Umans en darrèr informe deth periòde de sessions deth 22 de junhsèga de 2014, eth quau a requerit as institucions der Estat «Identificar mecanismes idonèus entà hèr efectiva era nullitat des sentències adoptades en violacion des principis fundamentaus de dret e deth degut procès pendent era Guèrra Civi e eth franquisme. Estudis comparadi d'autres experiències de païsi qu'an afrontat rèptes similars, fòrça includidi en contèxte europèu, pòden resultar extrèmament profitosi», en aplicacion dera Declaracion universau des drets umans, eth Pacte internacionau des drets civius e politics e eth Convèni entara salvaguarda des drets umans e des libertats fundamentaus.

Es arguments en sens de non redaurir vielhes herides deth passat son inconcebibles en un contèxte democratic, ja qu'eth restabliment dera dignitat des victimes non cerque era resvenja mès era vertat, era justícia, era reparacion e era garantia de non repeticion.

Quaranta dus ans dempús dera mòrt deth dictador Franco non i a agut cap lei que declare expressament era nullitat des jutjaments deth franquisme.

Per aquest motiu, aquesta lei, de conformitat damb er ordenament juridic, declare era illegalitat des tribunaus e des procediments e es conselhs de guèrra instruits en Catalonha dempús deth 5 d'abriu de 1938 enquiath deseme deth 1978 pera Auditoria de Guèrra dera Armada d'Aucupacion, nomentada posteriorament Auditoria

CVE-DOGC-B-17185096-2017

de Guerra dera IV Region Militar.

Maugrat que, a mesura qu'eth conflicte anèc auançant e qu'anèren passant ans de dictadura, es autoritats franquistes provèren de dotar aguesti esturments de repression d'ua aparença de legitimitat e de juridicitat, resulte impossible considerar qu'aguesti organs auessen ua autentica natura juridica.

Entà poder considerar qu'un grop de persones jutge e conferir ad aquerò que decidisquen era consideracion e eth necessari efècte de «causa jutjada», cau poder sostier eth dret qu'er organ en qüestion ei reaument jurisdiccional, que se tracte d'un autentic tribunal.

Non se pòt considerar organ jurisdiccional aqueth que non respècte es mès minimas garantias d'imparcialitat, dret de defensa e causa jutjada des sues resolucions, o que non gaudís d'independència dera rèsta de poders der Estat, aumens en sens qu'existisque ua atribucion generica minimament racional deth poder de jutjar a un organ sufisentament individualizat.

Des conselhs de guèrra franquistes e des organs, jurats e tribunaus a qué se hè referència non se'n pòt dèder de cap des manères que siguessen organs jurisdictionaus, que complissen es minimis requisits entà exercir era foncion de declarar eth dret, pròpia d'un tribunal. Era analisi dera sua natura, composicion e actuacion mos obligue a veir-les coma çò que sigueren, ua farsa. Ua actuacion de hèt revestida a pena dera mèra aparença, mès o mens sofisticada en foncion deth moment istoric, d'organs jurisdictionaus.

Aqueri procèssi politics contraris ara legalitat se mantenguèren ath delà dera mòrt deth dictador en conselhs de guèrra per causes de caractèr politic damb infraccion des drets fundamentaus de fòrça persones, que sigueren injustament sosmetudes e, pr'amor d'aguesti, bèra ua d'eres, executades.

Atau, constatada era nullitat d'origina des procediments e des resolucions, senténcias, condemnes e sancions que n'emanèren, coma accions de hèt e non pas jurisdictionaus que sigueren, e declarada legaument era sua il·legitimitat, non a de comportar cap problèma qu'era lei ne constate e ne declare era nullitat, e cerque tanben d'establir un mecanisme administratiu agil entà obtier certificacion individualizada d'aguesta circumstància qu'era lei constate e declare.

Atengut qu'es procèssi e es resolucions dictades pes tribunaus militars sigueren publics, entà hèr efectiva era valor reparatòria, aguesta lei abilite ar Archiu Nacionau de Catalonha pr'amor qu'elabòre e publique ua lista de procèssi e senténcias.

Per tot açò, a arribat eth moment d'assumir era responsabilitat istorica deth Parlament de Catalonha, deuant es victimas d'aqueri procèssi, reparant es abusi cometudi peth regim franquista contra era legalitat judiciale e procedimental e hèt era reparacion exigida pes persones represalhades, era societat catalana e es instàncies internacionaus.

Article unic. Reparacion juridica des victimas deth franquisme

De conformitat damb eth conjunt der ordenament juridic, qu'includís normes autant de dret internacionau coma de dret intèrn, se declaren illegaus es tribunaus dera Auditoria de Guerra dera Armada d'Aucupacion, nomenada posteriorament Auditoria dera IV Region Militar, qu'actuèren en Catalonha a compdar d'abri de 1938 enquia deseme de 1978, per èster contraris ara lei e vulnerar es mès elementàries exigéncias deth dret a un jutjament just. E, en conseqüència, se dedusís era nullitat de plen dret, originària o sobrevenguda, de totes es senténcias e resolucions des causes instruïdes e des conselhs de guèrra, dictades per causes politiquas en Catalonha peth regim franquista.

Disposicions finaus

Prumèra. Autorizacions

1. S'autorize ar Archiu Nacionau de Catalonha entà qu'elabòre e hèsque publica ua lista des procèssi instruïts e des senténcias adoptades cossent damb eth Ban deth 28 de junhsèga de 1946, eth Decret deth 31 d'agost de 1936, eth Decret numèro 55 der 1 de noveme de 1936, era Lei deth 2 de març de 1943, era Lei deth 18 d'abri de 1947, eth Decret 1794/1960, deth 21 de seteme, e eth Decret lei 10/1975, deth 26 d'agost, en qué consten eth numèro de procediment, era persona fisica o juridica acusada e era condemna imposada. Era lista s'a de publicar eth madeish dia dera entrada en vigor d'aguesta lei.

CVE-DOGC-B-17185096-2017

2. S'autorize ar Archiu Nacionau de Catalonha entà qu'actualize era lista, s'a coneishença, per quinsevolh causa, dera existència de procèssi que non se nomenen en apartat 1 per non auer-se'n conservat testimoni en archiu des tribunaus militars en Catalonha.

Dusau. Entrada en vigor

Aguesta lei entre en vigor londeman d'auer estat publicada en *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

Per tant, ordeni a toti es ciutadans as quaus sigue d'aplicacion aguesta Lei coopèren ath sòn compliment e qu'es tribunaus e es autoritats as quaus pertòque la hèsquen complir.

Palai dera Generalitat, 4 de junhsèga deth 2017

Carles Puigdemont i Casamajó

President dera Generalitat de Catalonha

(17.185.096)